



Center for Inter-American Relations

Public Affairs

ESTABILIDAD Y TRANSICION DEMOCRATICA EN CHILE

Francisco Orrego Vicuña
October, 1980

A comment on

EL RETORNO A LA DEMOCRACIA EN CHILE:
FACTORES CONDICIONANTES

Edgardo Boeninger K.
August, 1980

Prepared for presentation at

DEMOCRACY IN CHILE
Bellagio, Italy
October 27-31, 1980

Discussion paper: Not to be
quoted or reproduced in any
form without written permis-
sion from both the author and
the Center for Inter-American
Relations.

Estabilidad y transición democrática en Chile

Comentarios preparados para el Seminario sobre Democracia en Chile, organizado por el Center for Inter-American Relations, Bellagio, Octubre 27-30, 1980.

Francisco Orrego Vicuña

Una de las características más firmemente establecidas de la tradición política chilena, que forma parte sustancial de la manera como cada ciudadano decide sus preferencias, es la búsqueda de la estabilidad a través del proceso político y de sus actos electorales. Los cambios políticos bruscos no son comunmente deseados por los chilenos, como tampoco las alteraciones económicas o sociales. Ello no se debe a que el chileno sea estático, que no lo es, y, por el contrario, es fundamentalmente innovador y creativo. Tampoco se debe a que esté en contra del cambio político, pues con frecuencia lo ha promovido. Se debe simplemente a que predomina en sus decisiones el factor estabilidad, sin que muchas veces ese proceso de cambio político haya asegurado la permanencia de este factor.

La crisis del sistema democrático comenzó en Chile cuando en cada elección presidencial la ciudadanía se veía enfrentada, no a la perspectiva de un cambio con estabilidad, sino a la de un cambio radical que le podía significar inestabilidad política general y, sobretodo, inestabilidad en su seguridad personal, en el empleo o en la ubicación social alcanzada, con frecuencia después de muchos sacrificios. Gobiernos como el de Arturo Alessandri y como los radicales fueron profundamente innovadores del sistema político, económico y social de Chile, pero lo hicieron dentro de un marco de estabilidad que permitió la plena aceptación del proceso por parte de la ciudadanía.

La elección del Gobierno de la Democracia Cristiana en 1964, se debió en parte al apoyo que su concepción de la Revolución en Libertad suscitó en algunos sectores del país, pero, sobretodo, se debió a una mayoría que buscaba la estabilidad, que incluyó entonces a la totalidad de la derecha y de los independientes de centro. Una parte importante de esa mayoría fue la que seis años

después postulaba la candidatura de Jorge Alessandri, pues no había encontrado la estabilidad buscada en el sistema del partido único de gobierno.

Las dificultades políticas que encontró el Gobierno de la Unidad Popular también se originan en el factor estabilidad. Muchos planes del Gobierno, no obstante involucrar cambios en profundidad, fueron aceptados por la ciudadanía, como fue, por ejemplo, el caso de la nacionalización bancaria o de la nacionalización del cobre. Pero cuando los cambios propuestos llegaban a amenazar la estabilidad, según la percibía una mayoría del país, incluyendo sectores que en un momento habían acompañado al Gobierno, la resistencia pasaba a ser total y decidida. Casos típicos de esto último fueron el de la Escuela Nacional Unificada, los desbordos de violencia política o las escases del mercado, entre otros.

El Gobierno militar ha basado buena parte de su estrategia política en subrayar su contribución a la estabilidad y el orden y en hacer presente que cualquier otra alternativa política o económica atentaría contra ese factor. Toda la propaganda desarrollada en preparación del plebiscito cultivó precisamente esta imagen, con bastante más eficacia que lo que antes habían logrado varias "campañas del terror", que solían caer en el absurdo y por tanto en el ridículo. Es esta identificación con la estabilidad la que le otorga el respaldo con que cuenta y pone en seria dificultad la estrategia de cualquier oposición, que aparece atentando contra la misma.

Sobre la base de las consideraciones anteriores es posible llegar entonces a una primera conclusión en lo que respecta a la factibilidad de una transición democrática en Chile. Ella deberá asegurar, como primera prioridad, que se mantenga el factor estabilidad incólume, esto es, que la ciudadanía tenga en todo momento la certeza de que se trata de un proceso normal, ordenado y bajo control. Si en cualquier momento previo, o simultáneo a dicha transición, se crea la perspectiva de que el país se enfrenta nuevamente a un salto en el vacío y a una situación de inseguridad, la transición será irremediamente resistida y probablemente abortada, en parte por la influencia de los sectores que

conforman el gobierno pero también en parte por la decisión de sectores importantes que, de otro modo, habrían estado dispuestos a un pronto regreso a la democracia.

Obviamente la mayor complejidad para lograr que esa estabilidad se mantenga inalterada radica en el plano político. Hasta ahora no se ha logrado estructurar en Chile una alternativa viable de gobierno, en que la composición de fuerzas políticas que la integren asegure, por una parte, una mayoría significativa del país y, por otra parte, garantice los requerimientos de la estabilidad y de la confianza. No significa esto que no exista una mayoría de chilenos que deseen el regreso a la normalidad democrática y a un gobierno civil, mayoría que ciertamente está presente, pero que mientras no se diseñe una fórmula política viable continuará sin expresión y, en algunos casos significativos, continuará incluso prefiriendo al gobierno militar.

Es cierto que las restricciones imperantes en materia de libertad de expresión y las rígidas normas que se aplican al llamado receso político no facilitan la necesaria fluidez de las ideas o el debate público del cual pudiera emanar, al menos en sus rasgos fundamentales, esa alternativa. Pero no es menos cierto que los sectores civiles responsables, que no son difíciles de identificar en una clase política reducida como la chilena, tampoco han hecho el esfuerzo necesario para concebir, aún cuando sea primero en el terreno intelectual, el proyecto político que pueda constituirse en alternativa.

Muchos son los factores que explican esta inacción en torno a un proyecto político, incluyendo la división existente entre sectores democráticos e incluso la indefinición de que debe entenderse por sectores democráticos, situación que siempre conlleva el riesgo de que bajo esas banderas se cobijen determinadas posiciones que ciertamente no contribuirían a la confianza y estabilidad buscada. Pero hay un factor que destaca sobre todos los demás, quizás por su dramatismo. No ha habido en los últimos años una renovación del pensamiento político democrático chileno, que básicamente continúa evocando como motivación fundamental los valores del pasado. Con toda la virtud que estos tienen y en la seguridad de que su vigencia es permanente, no bastan para constituirse en una alternativa atractiva, sobretodo frente a circunstancias especialmente complejas,

que entre otras cosas incluyen un cambio generacional violento.

De esta manera, la viabilidad de una transición estable exige como primera prioridad la elaboración de un proyecto político en el cual puedan coincidir los sectores democráticos genuinos, logrando representar una mayoría tan poderosa que por si misma sea la principal garantía de estabilidad, moderación y control. Para que esto ocurra es también evidente que el proyecto político deberá caracterizarse por su renovación de las ideas democráticas, por su atractivo intelectual y por su capacidad de mirar más hacia el futuro que hacia el pasado.

Solamente sobre la base de un proyecto político renovado y sólido es que se logrará que en Chile se perciban las elecciones y las alternativas de cambio político como sinónimo de normalidad, que pudiendo significar una innovación, y desde luego una transición, no representará una situación de caos o violencia. Para muchos sectores la idea de una elección democrática llegó a identificarse con actos de anormalidad política y hoy día todavía la resisten, no porque repudien la democracia misma sino porque esa anormalidad les resulta inaceptable. Esta es la situación básica que hay que cambiar y la única manera de hacerlo es resguardando debidamente el factor estabilidad.

Algunos sectores han comenzado recientemente a mostrar su impaciencia frente a los plazos mas bien largos en que podría efectuarse una transición democrática, habiéndose renovado por algunos dirigentes políticos el llamado abierto o insinuante de la lucha violenta como manera de poner término al gobierno militar. Este enfoque merece algunas observaciones, pues está siempre latente en las discusiones sobre el futuro político de Chile. En primer lugar, se hace necesario efectuar una distinción. Hay quienes postulan la violencia por razones ideológicas, por táctica revolucionaria o simplemente por exasperación, pero en esa misma medida hacen más difícil que una transición democrática pueda prosperar.

Pero también pareciera haber algunos sectores que promueven la tesis violentista, no para alcanzar un pronto término del gobierno militar, sino precisamente para asegurar el objetivo contrario, esto es, que el gobierno militar

pueda prolongarse lo suficiente como para que los grupos genuinamente democráticos sufran un desgaste político irremediable y, de esta manera, cuando se alcance la etapa de transición emerja como única alternativa la que esos sectores patrocinan. Este modelo no carece de precedentes. Con ocasión del reciente plebiscito hubo ocasión de observar algunas reacciones en el exterior que parecen apuntar en este sentido, particularmente en lo que se refiere a sus planteamientos de como estructurar la oposición democrática.

Es demasiado evidente que la violencia no constituye una alternativa política en Chile bajo ningún punto de vista. Ella no sólo es enteramente incompatible con una transición democrática estable, sino que además sería un factor que haría perdurar el gobierno militar mucho más allá de lo que sus propios partidarios desean. En términos del proyecto político que se postula, la violencia debe ser absolutamente excluida. En este sentido, el proyecto democrático no sólo estaría concebido para asegurar una transición estable de un gobierno militar a un gobierno civil, sino además para resguardar a este último de los excesos antidemocráticos o violentistas que algunos sectores pudieran cometer, cualquiera sea su signo ideológico. Este es también un factor esencial de la estabilidad señalada.

Entre los principales problemas políticos que enfrenta una transición democrática, es necesario también referirse al difícil problema del rol de las fuerzas armadas en esa transición. Cualquiera sea la dosis de simpatía o de antipatía con que se mire ese rol, el hecho es que él debe tenerse en cuenta dentro de un cuadro de elemental realismo político. En primer lugar, la cooperación de las fuerzas armadas resulta esencial para asegurar la factibilidad de la transición, particularmente en lo que se refiere a las necesarias garantías de estabilidad que deben acompañar al proceso. Enseguida, su rol también es indispensable para asegurar el orden público y el control de los desbordes de violencia que pudieran ocurrir durante la transición o en cualquier momento posterior. Todo ello sin perjuicio de sus tareas profesionales en lo que respecta a la defensa nacional.

Desde este punto de vista, el proyecto político democrático no debiera adoptar una filosofía antimilitarista, que en definitiva sería contraproducente, sino por el contrario su óptica debiera procurar asociar a las propias fuerzas armadas a las difíciles tareas de la construcción democrática. Concebido

el proyecto en estos términos, con particular resguardo de la estabilidad, no es imposible que las fuerzas armadas pudieran sumarse al mismo, pues verían en él la posibilidad de una transición ordenada y de un sistema político estable, que contaría con su propia participación en los términos que se definan. En este sentido, las referencias que se hicieron durante el proceso plebiscitario a la formación de un gobierno cívico-militar de transición, apuntan en el sentido apropiado, aún cuando el contexto en que él pudiera operar plantea exigencias mucho más complejas, como las que se han examinado en estos comentarios.

Hay todavía otro aspecto estrechamente vinculado a la preservación del factor estabilidad, que debe tenerse especialmente en cuenta en relación a un período de transición: es el relativo al sistema económico que se ha venido aplicando en Chile durante los últimos años. Desde los variados ángulos doctrinarios en que se organiza la política chilena, pueden plantearse muchas críticas, algunas de las cuales no dejan de ser convincentes en determinados aspectos, principalmente en lo que se refiere a los efectos sociales de ese sistema, pero también es un hecho real que se han logrado superar los vicios más graves de la economía chilena tradicional.

En esta medida, y sujeto a las correcciones que son deseables para eliminar esos efectos adversos, la política económica ha pasado a constituir en sus rasgos fundamentales una parte sustancial del factor estabilidad que se viene comentando. La percepción de que ella pudiera ser fundamentalmente variada se traduciría en una alteración tan seria del factor estabilidad como la que derivaría del violentismo o de la sensación de que una transición involucra nuevamente el riesgo de un salto en el vacío. En este sentido, el realismo político exige nuevamente el abandonar las viejas querellas doctrinarias sobre la economía chilena, que llevaron a la postulación y aplicación de toda suerte de esquemas, ninguno de los cuales logró solucionar problemas sino crear nuevas dificultades. El proyecto político democrático haría bien en reconocer esta realidad que parece imponerse.

Finalmente hay otra observación esencial. Diversos sectores han comenzado a desarrollar sus estrategias y expectativas en la creencia de que lograrán imponerlas en Chile sobre la base de la presión externa, cualquiera que sean los gobiernos u organismos en que ella se origina. Sin embargo, todo ello

constituye un ejercicio contraproducente. La viabilidad de un proyecto político democrático estará única y exclusivamente determinada por su capacidad de convencimiento del electorado chileno y por el grado de genuino respaldo mayoritario que logre obtener, sin que ninguna de esas influencias extranjeras se traduzca en otra cosa que contribuir al cuestionamiento de las intenciones y propósitos que persigue la restauración democrática en Chile.